

C.A. de Santiago

Santiago, tres de octubre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don Taufik Ismael Chible Villadangos, abogado, en representación de Televisión Nacional de Chile (TVN), ha interpuesto, conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 18.838, recurso de apelación contra la resolución del H. Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que impuso una multa de 21 Unidades Tributarias Mensuales a TVN mediante el Ordinario N° 434 de 4 de mayo de 2022, que le fuera notificado el día 12 del mismo mes y año, con el objeto que esa decisión se deje sin efecto y en su lugar no se aplique sanción alguna a TVN o, en subsidio, la sustituya por amonestación, con costas.

Fundamenta su arbitrio señalando que la normativa aplicable en este caso es la Ley N° 20.422, que contiene las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión social de Personas con discapacidad, en especial sus artículos 1 y 25 que transcribe, y el Decreto N° 32 de 10 de marzo de 2011, que contiene el “Reglamento que establece normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso a la programación televisiva para personas con discapacidad auditiva”, de cuyo artículo 6° -alega- se desprende que el organismo encargado de velar por el cumplimiento del reglamento y de la Ley N° 20.422 es el Servicio Nacional de la Discapacidad y no el CNT, por lo que la incompetencia de su Honorable Consejo resulta evidente.

En cuanto a la tramitación ante el CNTV, señala que los cargos fueron formulados mediante Ordinario N° 260 por infracción al artículo 1 de la Ley N° 18.838, supuestamente verificada al dificultar o entorpecer el acceso de la información comunicada a la población con discapacidad auditiva. Los descargos de TVN se formularon el 17 de marzo de 2022, solicitando el rechazo de los cargos porque TVN no tenía control sobre la ubicación específica de la pantalla del recuadro del intérprete de señas, siendo el



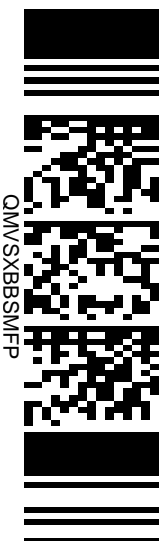
generador de caracteres (GC) necesario para cumplir las obligaciones de la Ley N° 20.422, por lo que pidió un término probatorio para analizar la dificultad del acceso de comunicación para la comunidad que utiliza el lenguaje de señas. Finalmente, señala que sorpresivamente mediante el Ordinario N° 434 ya referido, el CNTV impuso a TVN la multa apelada, calificando su actuar como irrespetuoso e indolente, desechando el análisis de fondo de la argumentación de TVN y omitiendo el término probatorio solicitado.

Aduce a continuación 4 razones para acoger la apelación.

La primera de ellas dice relación con problemas de legalidad en el procedimiento y con la incompetencia del Honorable Consejo Nacional de Televisión.

Al respecto argumenta que es fácil entender por qué la Ley N° 18.838 y el actuar del CNTV en el procedimiento sancionatorio han sido constantemente criticados por falta de legalidad y su posible inconstitucionalidad, más considerando el contenido de su sanción de 18 de noviembre de 2020, desde su tesis de ilícito administrativo de mera actividad y peligro abstracto hasta contravenciones directas a las bases fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, llegando incluso a la transgresión de normas en temas como cosa juzgada y desasimiento del tribunal, reviviendo procesos absolutorios terminados con la finalidad de sancionarlos, terminando en la actualidad por concluir que el actuar del CNTV se encuentra absolutamente descontrolado, lo que hace casi imposible la defensa de los intereses de los canales de televisión, ya que el mismo órgano que prejuzga termina por sancionar, crítica que se observa en el actual procedimiento sancionatorio.

Agrega que conforme el artículo 6 del ya citado Decreto N° 32, que contiene el reglamento referido en el artículo 25 de la Ley N° 20.422, es el Servicio Nacional de la Discapacidad el organismo encargado de la fiscalización y cumplimiento del mismo Decreto, lo que es lógico ya que es el organismo técnico especializado que puede determinar cuándo existe una transgresión a las

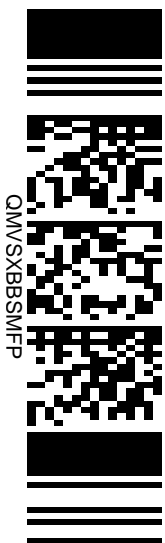


capacidades distintas de los sujetos de la Ley N° 20.422. Esto fue regulado, además, en el artículo 62 letra J) de este último cuerpo legal, en similar sentido; agregando que el artículo 2 inciso final del Decreto N° 32, entrega al CNT facultades para orientar las características y estándares de diseño y edición que los mecanismos de comunicación audiovisual a que se refiere el mismo artículo deberán reunir para la adecuada implementación de las acciones exigidas por dicho reglamento. Cita al efecto jurisprudencia administrativa del CNT en denuncia del caso 30291-Y4Y9P0 de 27 de enero de 2020, y lo expuesto en sesiones de fecha 4 de diciembre (punto 7), 11 de diciembre (punto 5) y 18 de diciembre de 2017 (puntos 7 y 8).

La segunda razón para acoger la apelación estaría dada por la errada interpretación del artículo 12 letra b) de la Ley N° 18.838, por cuanto atentos a las normas ya referidas que entregan al Servicio Nacional de la Discapacidad las facultades de fiscalización y sanción pertinentes, debe entenderse que aquel artículo establece sólo la obligación del CNTV de informar al Servicio, conforme lo que establece el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880.

En tercer lugar TVN aduce como razón para acoger su reclamo que sancionar supuestas transgresiones a la Ley N° 20.422 mediante el procedimiento de la Ley N° 18.838 provocaría la invalidez del acto administrativo; en tanto en este caso el Consejo Nacional de Televisión omitió su deber de informar al Servicio Nacional de Discapacidad sobre los hechos, conforme lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la Ley N° 18.838 en relación con el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880; lo que importa la infracción de un trámite obligatorio en el actual procedimiento administrativo; a lo que se suma que la obligación de informar es parte de la respectiva motivación del acto administrativo, que en este caso es absolutamente deficiente en el Ordinario N° 434 desde que éste no incluye referencia alguna al Servicio Nacional de Discapacidad.

Por último, como cuarta razón, argumenta la apelante en torno a las características técnicas de la señal del Gobierno, y a la

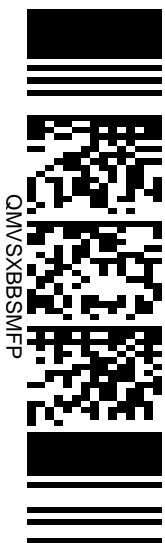


imprevisibilidad y ausencia de control por parte de TVN, indicando que el contenido fiscalizado se refiere a la video llamada que realizó el ex Presidente Sebastián Piñera al Presidente electo Gabriel Boric, la que duró 3 minutos y 50 segundos, hecho verificado sorpresivamente teniendo TVN momentos para prepararse a retransmitir la señal del Gobierno. Si bien la llamada del Presidente de la República saliente al electo era una ritualidad esperable en la ocasión, no dependía de la transmisión de TVN como tampoco de las características técnicas de la señal estatal, siendo indiscutido que el causante de cualquier dificultad provino de la transmisión oficial y no de TVN, que se limitó a retransmitir la video llamada conforme los requerimientos técnicos, usuales y aceptados por el propio Honorable Consejo Nacional de Televisión.

Segundo: Que doña Alia Faride Zerán Chelech, Presidenta y en representación del Consejo Nacional de Televisión, pide que sea rechazada la reclamación con costas.

Refiere que luego de haber formulado cargos contra la reclamante en sesión de 7 de marzo de 2022 y de que ésta formulara oportunamente sus descargos, posteriormente, en sesión de 21 de abril del mismo año, acordó imponer a TVN sanción de multa de 21 UTM (veintiún Unidades Tributarias Mensuales), contemplada en el artículo 33 N° 2 de la Ley N° 18.838, por contravenir su deber de funcionar correctamente en los términos del artículo 1°, incisos 4° y 8°, de la Ley N° 18.838, al dificultar y entorpecer el acceso a la información, comunicada a la población con discapacidad auditiva a través del recuadro del intérprete de señas, al incorporar elementos de edición sobre dicho recuadro durante la emisión del especial de prensa “Chile Elige”, del día 19 de diciembre de 2021, vulnerando con ello el derecho al acceso a la información que les asiste. Contra este acuerdo, TVN interpuso la presente reclamación.

La infracción del correcto funcionamiento del servicio televisivo en este caso se refiere al artículo 1°, incisos 4° y 8°, de la Ley N° 18.838, en lo que respecta al incumplimiento por la concesionaria del permanente respeto a través de su



programación, de la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, respecto del derecho fundamental de las personas a recibir informaciones, como parte del derecho de libertad de expresión, y en particular de las personas afectadas con discapacidad auditiva; y a la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones televisivas para personas con necesidades físicas especiales, y la difusión de programación de interés nacional.

En relación a la naturaleza y efectos del recurso, indica que aún cuando el artículo 34 de la Ley N° 18.838 utiliza el vocablo “apelación”, se trata de un recurso especial de reclamación de legalidad, por lo que no tiene por objeto que esta Corte se pronuncie como superior jerárquico de CNTV, órgano constitucional autónomo ajeno al Poder Judicial, sino para que revise la legalidad del acto administrativo sancionatorio, tal como lo ha resuelto la jurisprudencia que cita, en virtud del principio de impugnabilidad consagrado en el artículo 15 de la Ley N° 19.880.

Aduce que el acuerdo sancionatorio impugnado se ajusta a la competencia que la Constitución y la Ley Confieren al CNTV en los artículos 19 N° 12, inciso 6°, de la primera y los artículos 1 y 12 letra a) de la Ley N° 18.838, en concordancia con la normativa internacional que cita.

Agrega que en este caso, el acuerdo sancionatorio materia del presente recurso determina precisamente como infracción del *correcto funcionamiento del servicio televisivo*, no la falta de un sistema de comunicación especial para la población con discapacidad auditiva, sino la obstaculización efectuada por la concesionaria de la visualización del recuadro de lengua de señas contenida en la emisión emanada del Palacio de Gobierno, lo que impidió a las personas afectadas con discapacidad auditiva conocer el contenido de una información de indudable interés público, que en ese momento se difundía, bien jurídico consagrado en el artículo 1°, incisos 4° y 8° y final, de la Ley N° 18.838.



Asimismo, luego de formulados los cargos y analizados los descargos de la concesionaria, el CNTV dio razón de los argumentos que tuvo en consideración para la decisión del asunto sometido a su conocimiento, dando plena satisfacción del deber de hacer exposición fundada de sus deliberaciones y de las conclusiones que justificaron su sanción. Así, el acuerdo sancionatorio debe considerarse plenamente ajustado a derecho y decretado con total apego a las competencias que, a estos efectos, le concede la Constitución y la ley.

A continuación, la reclamada se extiende sobre los fundamentos del acuerdo sancionatorio, precisando que éste se halla suficientemente fundado y da cumplimiento, por ende, a la exigencia en tal sentido que imponen los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N° 19.880.

Enseguida precisa que el hecho que motivó la infracción está acreditado y reconocido por la concesionaria, razón por la cual el procedimiento sancionatorio no fue recibido a prueba, al no haberse planteado hechos substanciales, pertinentes y controvertidos. Indica que el procedimiento se inició por denuncia ciudadana contra el programa especial de TVN sobre la votación presidencial en segunda vuelta, denominado “Chile Elige”, del siguiente tenor: *“En la transmisión oficial del llamado del presidente Piñera al presidente electo Gabriel Boric había un intérprete de lengua de señas, sin embargo, y para poner los GC con diversos mensajes en pantalla, lo taparon, no es primera vez que ocurre, más aún en el canal público.”*. De esta forma los hechos que motivaron el juicio de reproche corresponden a la obstaculización del recuadro de lengua de señas de la emisión emanada de la Presidencia de la República, ubicando en su pantalla un texto propio mediante su generador de caracteres, que impidió la visualización de la comunicación destinada a la población con discapacidad auditiva, la que, como consecuencia de lo anterior, no pudo conocer el contenido de la conversación entre el Presidente en funciones y el Mandatario electo, perturbando el ejercicio de su derecho a la información respecto de un hecho de indudable



relevancia nacional.

Destaca la reclamada que la infracción se encuentra legalmente determinada, consignando sus considerandos sexto, séptimo y octavo los fundamentos constitucionales de la libertad de expresión referido a las personas con discapacidad auditiva, agregando el motivo décimo segundo que corresponde al Estado realizar una serie de medidas necesarias para que personas con discapacidad puedan desarrollarse como seres humanos dignos; el considerando decimotercero, que por la relevancia de la información, la señal oficial del Palacio de la Moneda incorporó un recuadro con un intérprete de lengua de señas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad auditiva a ser informadas sobre un hecho de interés general, y el considerando decimoséptimo, que el reproche corresponde al irrespetuoso e indolente trato propinado a la población con discapacidad auditiva, ya que en forma indolente e injustificada la concesionaria voluntariamente colocó una banda que cubría el recuadro con el intérprete, entorpeciendo de ese modo el acceso a la información.

Además, adujo que el procedimiento respetó el debido proceso y el derecho a defensa de la concesionaria, porque se dio cumplimiento a los principios de transparencia, publicidad, contradictorio y demás requisitos que, en este ámbito, demanda el justo y racional procedimiento, habiéndosele respetado su derecho a formular descargos. Así también señaló la reclamada que la sanción impuesta es proporcional a la infracción establecida, dado que en este caso se puso en riesgo un bien jurídico particularmente sensible, que la concesionaria había sido sancionada anteriormente por esta misma causa (en el caso C-8780 del acta de la sesión del Consejo de 9 de noviembre de 2020) y por último que la cobertura del programa fue de alcance nacional.

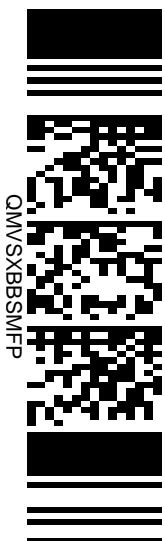
Finalmente, discurre la reclamada argumentando que las alegaciones vertidas en el recurso deben ser desestimada, porque las normas invocadas por la reclamante no dicen relación con el fundamento del hecho infraccional sancionado en este caso, a saber, artículo 1º, incisos 4 y 8 de la Ley N° 18.838, esto es, el



correcto funcionamiento del servicio televisivo. Precisa que, en los considerandos Noveno, Décimo y Undécimo del citado acuerdo, el CNTV efectúa un análisis del alcance de la Ley N° 20.422, del reglamento de su artículo 25, y de la obligación impuesta al CNTV en el artículo 12, letra b), inciso 4°, de la Ley N° 18.838, concluyendo claramente en el considerando Décimo Séptimo, que en este caso no se reprocha el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 25 de la Ley N° 20.422, de los concesionarios de radiodifusión televisiva de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual, ni de las citadas normas relacionadas, sino el irrespetuoso e indolente trato propinado a la población con discapacidad auditiva, ya que en forma indolente e injustificada la concesionaria voluntariamente colocó una banda que cubría el recuadro con el intérprete de señas, entorpeciendo de ese modo el acceso a la información proporcionada por el Estado, representado en la emisión de la Presidencia de la República, que daba cumplimiento con la obligación de hacer -insertar el intérprete de señas- que es a la que se refiere erróneamente TVN.

Así, agrega, el incumplimiento que en concreto se sanciona es inherente a la labor de fiscalización del correcto funcionamiento de la televisión que constitucional y legalmente compete al CNTV, materia ajena a las competencias del SENADIS, como se puede apreciar de una simple lectura de su Ley Orgánica y de la propia Ley N° 20.422.

Añade que el inciso 8° y final, del artículo 1°, de la ley N° 18.838, que incorpora dentro del correcto funcionamiento *la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales*, fue introducido en el año 2014 por la ley N° 20.750, que introdujo la televisión digital terrestre, norma de quorum calificado especial posterior a la Ley N° 20.422. Desde esa fecha el CNTV está facultado para procurar el correcto funcionamiento en materia de igualdad de acceso de personas discapacitadas a las transmisiones televisivas, lo que comprende también los incumplimientos del artículo 25 de la ley N°



20.422 y DS N° 32, de 2011, en determinados aspectos cualitativos y de oportunidad, que no se superponen con las competencias del Servicio Nacional de la Discapacidad.

Finalmente, aduce que las alegaciones relativas a la presunta ausencia de control o falta de dominio material de la conducta imputada deben ser desestimada, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 18.838, la concesionaria es plenamente responsable de todo aquello que transmita o retransmita a través de su señal.

Por todo lo anterior pide que el reclamo de TVN sea rechazado, con costas.

Tercero: Que en estos autos ha comparecido TVN ejerciendo la acción que le acuerda el artículo 34, inciso 2°, de la Ley N° 18.838, que en lo pertinente dispone que “La resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago” y que “La apelación deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, ser fundada, y para su agregación a la tabla, vista y fallo se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección”.

Pues bien, tal como ha sido sostenido ya por la Excma. Corte Suprema en reiteradas ocasiones (roles Rol 6.750-2012, 47.898-2016, 100.726-2016, 15.369-2018, 30.515-2020, 69.774-2020 y 71.917-2020, entre otras), dicha norma no consagra propiamente un recurso de apelación -a pesar de que así lo llame- sino una reclamación jurisdiccional de ilegalidad del acto administrativo del artículo 15 de la Ley N° 19.880, toda vez que, ciertamente, esta Corte no es -como lo sería si se tratara de una apelación, conforme al artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, un tribunal superior respecto del órgano administrativo autónomo reclamado, y por ende su competencia es más restringida que aquella amplia que confiere al tribunal ad-quem el recurso ordinario, limitándose al estricto examen de legalidad del acto administrativo impugnado, pudiendo *“dar por establecida la ilegalidad, invalidar el acto administrativo y disponer la decisión*



adecuada al caso, si procediere, conforme a los límites de su competencia en un reclamo de ilegalidad” (SCS Rol N° 21.814-2017).

Cuarto: Que la reclamante ha invocado, como primera razón para acoger su arbitrio, una pretendida incompetencia del CNTV para sancionarla con multa por estimar que incurrió en infracción a la Ley N° 20.422, aduciendo que se encontraba facultado legalmente sólo para poner en conocimiento de Servicio Nacional de Discapacidad la anomalía detectada, a fin de que sea este último quien, en ejercicio de su rol fiscalizador, accione ante el Juzgado de Policía Local respectivo. Asimismo, alegó problemas de legalidad en el procedimiento administrativo.

Quinto: Que, sin embargo, de la atenta lectura de las leyes N° 18.838 y N° 20.422 y del Decreto N° 32 de 10 de marzo de 2011, se desprende que el órgano reclamado sí se encuentra legalmente facultado para obrar como lo hizo, por cuanto, en primer lugar y tal como se desprende del considerando decimoquinto de la resolución impugnada, la infracción concreta que sirvió de sustento a la sanción consistió en una contravención al *deber de funcionar correctamente* que pesa sobre la concesionaria fiscalizada en los términos del artículo 1º, incisos 4º y 8º, de la Ley N° 18.838, al haber dificultado y entorpecido el acceso a la información comunicada a la población con discapacidad auditiva, y no consistió, entonces, directamente en una vulneración de la Ley N° 20.422; circunstancias en las cuales aquél texto legal, como se verá, le otorga competencia para imponer sanciones a la concesionaria infractora.

En efecto, el artículo 19 N° 12, inciso 6º, de la Constitución Política de la República, consagra en lo pertinente que: *“Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación.”*

En conexión con dicha norma, el artículo 1º, inciso 1º, de la Ley N° 18.838, establece que *“El Consejo Nacional de Televisión, en adelante “el Consejo”, es la institución autónoma de rango*



constitucional creada por el inciso sexto del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el territorio nacional”.

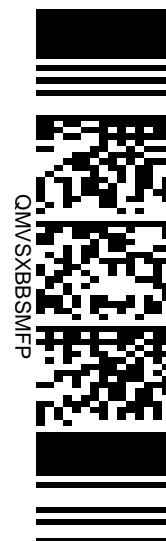
En su inciso 4º agrega: “Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” A lo que, finalmente, su inciso 8º agrega que “También se podrá considerar correcto funcionamiento, entre otras cosas, la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales...”

Por su parte, el artículo 12, letra a) de la ley -en armonía con el artículo 1º- establece como atribución del Consejo la de velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión se ajusten estrictamente al "correcto funcionamiento", que se establece en el artículo 1º de esa ley.

La letra b), por su parte, establece: “El Consejo Nacional de Televisión tendrá las siguientes funciones y atribuciones:” **b)...** (inciso 4º) “El Consejo Nacional de Televisión deberá siempre velar por el cumplimiento de la ley N° 20.422 y su reglamento”.

Y finalmente en su letra i) el mismo artículo 12 le asigna la atribución de: “ **i)** Aplicar, a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión, las sanciones que correspondan, en conformidad a las normas de esta ley”.

Por último, el artículo 33 del mismo cuerpo legal estatuye, entre las sanciones correspondientes a las infracciones de las normas de esa ley, la de multa no inferior a 20 ni superior a 200 Unidades Tributarias Mensuales para el caso de tratarse de



concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva, agregando que para el caso de que dichos concesionarios lo sean de servicios limitados de televisión de carácter nacional, las multas podrán ascender hasta un máximo de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, y que en caso de reincidencia en una misma infracción, se podrá duplicar el máximo de la multa.

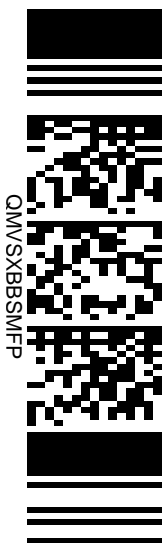
Las normas legales anteriores, en especial la del artículo 12 letra b), inciso 4º, de la Ley N° 18.838, deben relacionarse con las de la Ley N° 20.422, entre las que cabe destacar su artículo 25, inciso 1º, que dispone. *“Los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los permisionarios de servicios limitados de televisión deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a las personas en situación de discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto se dictará a través de los Ministerios de Desarrollo Social, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno.”*

De la correlación de las normas transcritas es posible extraer las siguientes conclusiones:

a) Que tanto la Constitución Política de la República como el artículo 1º y 12, letra a), de la Ley N° 18.838, establecen como función y atribución del Consejo Nacional de Televisión la de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión que operan en el territorio nacional;

b) Que, en consecuencia, dichas normas establecen también la obligación de los servicios de televisión que operan en el territorio nacional y, por ende, de sus concesionarios o permisionarios, de funcionar correctamente;

c) Que conforme la misma ley, el correcto funcionamiento a cuyo cumplimiento ella obliga -estableciendo incluso el organismo encargado de velar por el mismo- involucra el respeto de los valores y principios que señala el inciso 4º de su artículo 1º, los que, de acuerdo a su inciso 8º comprenden, entre otras cosas, “la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones para



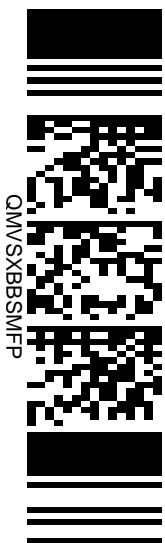
personas con necesidades físicas especiales”;

d) Que, como corolario de lo anterior, el CNTV se halla legalmente facultado para velar por que los concesionarios o permisionarios de los servicios de televisión funcionen correctamente, esto es, respeten de manera permanente, a través de su programación, la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a lo que se agrega la incorporación de facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales;

e) Que para estos efectos, atendido lo dispuesto en el artículo 12, letra i), de la referida ley, debe entenderse por “velar”, no sólo como indica el diccionario de la Real Academia Española “observar atentamente algo” o “cuidar solícitamente de algo” (Velar 1: acepciones números 4 y 7), sino también *“Aplicar, a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión, las sanciones que correspondan, en conformidad a las normas de esta ley”*; y

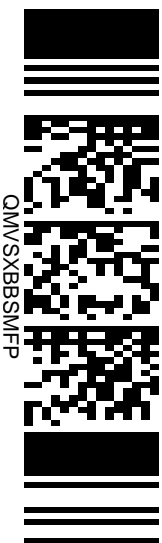
f) Que, en consecuencia, al formar parte del “correcto funcionamiento” al que obliga la Ley N° 18.838, el incorporar facilidades de acceso a las transmisiones para personas con necesidades físicas especiales y, en general, el respeto, a través de su programación, de los derechos fundamentales reconocido por la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes, el CNTV tiene competencia para no sólo observar y cuidar atentamente el cumplimiento de dicha obligación legal, sino también para aplicar las sanciones que legalmente correspondan por su inobservancia, que son las establecidas en el artículo 33 de la misma ley, en la forma que prevé su artículo 34.

De esta manera, aparece claro que en la especie el CNTV



sancionó a TVN por haber incurrido en una contravención al *deber de funcionar correctamente* -que pesa sobre ésta en virtud de lo que disponen los artículos 1º incisos 4º y 8º de la Ley N° 18.838- puesto que dificultó y entorpeció el acceso a la información comunicada a la población con discapacidad auditiva al transmitir el saludo del Presidente de la República saliente -Sebastián Piñera- al Presidente electo -Gabriel Boric- agregando, mediante un proceso de edición propio, un generador de caracteres sobre el recuadro donde figuraba el intérprete de señas; circunstancias en las cuales aquel Consejo actuó dentro del ámbito de sus facultades legales, puesto que, a fin de cuentas, no hizo otra cosa que cumplir con su mandato legal de velar por el correcto funcionamiento del servicio de televisión que la infractora transmite en su calidad de concesionaria televisiva, en los términos establecidos en la Ley N° 18.838.

Ahora bien, dicho lo anterior cabe precisar, en atención a las alegaciones de la reclamante, que el deber de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión que tiene el CNTV no pugna con la función que el artículo 62, letra j) de la Ley N° 20.422 asigna al Servicio Nacional de Discapacidad en cuanto establece: *“j) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Esta facultad incluye la atribución de denunciar los posibles incumplimientos ante los organismos o instancias jurisdiccionales respectivas, y ejercer acciones y hacerse parte en aquellas causas en que estén afectados los intereses de las personas con discapacidad, de conformidad a la ley”*. En efecto, no hay conflicto entre las competencias de ambos órganos, puesto que mientras el Servicio Nacional de Discapacidad tiene, en general, la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, el CNTV, en su rol de organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, tiene *-exclusivamente en este ámbito-* la atribución privativa de



sancionar el incumplimiento de -entre otros deberes legales- el que asiste a las concesionarias y permisionarias de servicios de radiodifusión televisiva en orden a: 1) incorporar facilidades de acceso a las transmisiones televisivas para personas con necesidades físicas especiales, y 2) dar cumplimiento a las normas de la Ley N° 20.422 y su reglamento; facultad sancionatoria de la que, en consecuencia, carece aquel Servicio en el ámbito televisivo, no obstante su atribución de denunciar los posibles incumplimientos que observe ante, entre otros organismos, el propio CNTV para que ejerza las facultades que le son propias.

Por otra parte, en cuanto al procedimiento administrativo que precedió al acto impugnado, tampoco puede ser tildado de ilegal como aduce la reclamante, por cuanto es un hecho reconocido que tuvo la oportunidad de formular sus descargos -como efectivamente lo hizo- y si bien no se recibió a prueba, esto ocurrió porque TVN no controvertió de modo sustancial y pertinente los hechos materia de la formulación de cargos.

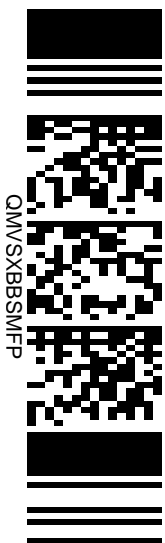
Sexto: Que la reclamante adujo, también, como segunda razón para acoger su arbitrio, una errada interpretación del artículo 12 letra b) de la Ley N° 18.838 en cuanto establece que el CNTV deberá siempre velar por el cumplimiento de la Ley N° 20.422, así como del artículo 37 bis de la Ley N° 19.880. Sin embargo esta alegación será desestimada por cuanto, como se ha visto, el CNTV interpretó correctamente las normas legales atinentes y, sin perjuicio de ello, la resolución impugnada expresamente señala en su motivo decimoséptimo que lo reprochado en la formulación de cargos no es, en caso alguno, un posible incumplimiento a la obligación contenida en el artículo 25 de la Ley N° 20.422, sino al *deber de correcto funcionamiento* que impone el artículo 1 de la Ley N° 18.838, por lo que es a partir de esta infracción que, en la especie, el CNTV arranca su competencia para actuar como lo hizo, y no de una eventual infracción a la ley N° 20.422 como pretende hacer ver la reclamante, de lo que se sigue que no hubo en este caso una malinterpretación del artículo 12 letra B de la Ley N° 18.838 conforme a la cual se hubiese estimado que surgía la



competencia del mentado organismo para sancionar a TVN. Tampoco hubo infracción al artículo 37 bis de la Ley N° 19.880, toda vez que de esta norma no se sigue, como pretende la reclamante, que el CNTV haya debido informar durante el procedimiento al Servicio Nacional de Discapacidad, toda vez que, como se razonó precedentemente, en la especie no había conflicto alguno de normas o competencias entre ambos organismos que así lo justificara.

Séptimo: Que las mismas razones expresadas precedentemente sirven para desestimar la tercera razón invocada por la reclamante para acoger su pretensión, consistente en que el hecho de sancionar supuestas transgresiones a la Ley N° 20.422 mediante el procedimiento de la Ley N° 18.838 provocaría la invalidez del acto administrativo, en tanto en este caso el CNTV habría omitido su deber de informar al Servicio Nacional de Discapacidad sobre los hechos, incurriendo con ello en la omisión de un trámite obligatorio del procedimiento administrativo y en una deficiencia respecto de la motivación del acto. En efecto, como se razonó previamente, en la especie no se sancionó una transgresión a la Ley N° 20.422, sino al artículo 1° de la Ley N° 18.838, y por otra parte al no existir conflicto de normas o competencias entre el CNTV y el Servicio Nacional de Discapacidad, aquel no tenía el deber de informar a éste acerca de los hechos, ni tampoco incurrió en deficiencia alguna en la motivación de la resolución impugnada, de cuya lectura se aprecia que cumple ampliamente con dicha obligación establecida en el artículo 11 de la Ley N° 19.880.

Octavo: Que la cuarta razón o ilegalidad alegada por la reclamante estaría dada por la imprevisibilidad y ausencia de control por su parte al no haber dispuesto del tiempo necesario para prepararse a retransmitir la señal del Gobierno en la que el Presidente de la República saliente saludó al Presidente de la República electo; lo que haría ilegal la sanción impuesta. Al respecto, tal como se argumenta en el motivo vigésimo de la resolución impugnada, que esta corte comparte, no es posible establecer en este punto ilegalidad alguna, desde que “*sin perjuicio*



de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 18.838, que hace plenamente responsable al servicio de televisión de todo aquello que transmita o retransmita a través de su señal, no resultan atendibles las excusas de la infractora respecto a una supuesta falta de tiempo para prepararse y colocar la banda con el Generador de Caracteres de manera que no obstaculizara el recuadro del intérprete, ya que su obligación en caso alguno consistía en el despliegue de dicha banda sino en funcionar correctamente, debiendo haberse abstenido, en el caso particular, de entorpecer el acceso a la información de la población con discapacidad auditiva, cosa que lamentablemente hizo al incorporar un elemento de edición propio sobre el tantas veces referido recuadro”.

Noveno: Que, de este modo, al haberse establecido la competencia del reclamado para actuar del modo en que lo hizo, basta un análisis detenido del reclamo de ilegalidad y una ponderación de los antecedentes reunidos en autos para, finalmente, subsumir los hechos denunciados en las normas jurídicas aplicables.

Por otra parte, al revisar los elementos fácticos que enmarcan el presente reclamo, se advierte que nada ilegal ocurrió durante la tramitación del procedimiento administrativo que culminó con la multa impuesta, el que se desarrolló dentro del ámbito de la competencia de la autoridad reclamada, observando el principio del debido proceso administrativo en un orden consecutivo legal donde la reclamante tuvo la posibilidad de ejercer sus derechos.

Décimo: Que la reclamante, como petición subsidiaria, solicitó sustituir la multa impuesta por amonestación, lo que será rechazado, en primer lugar, atendido a que la naturaleza de reclamación de ilegalidad y no de apelación que tiene el arbitrio que se revisa, impide acceder a ello por cuanto las facultades de esta corte se circunscriben únicamente a la revisión de la legalidad del acto, de modo tal que si éste se ajusta a ella, como es el caso, nada se le puede modificar. A mayor abundamiento, la gravedad de la infracción y de la información transmitida, su alcance nacional



y la reincidencia de que dio cuenta la reclamada en su informe, justifican plenamente la sanción impuesta, atendida su proporcionalidad en relación a la infracción de la que procede.

En razón de lo anterior y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículo 19 N° 2 y 12 de la Constitución Política de la República; y artículo 34 de la Ley N° 18.838; **se rechaza**, sin costas, por estimarse que la perdidosa tuvo motivos plausibles para litigar, la reclamación interpuesta por el abogado Taufik Ismael Chible Villadangos, en representación de Televisión Nacional de Chile, en contra del Ordinario N° 434 de 4 de mayo de 2022 del Consejo Nacional de Televisión.

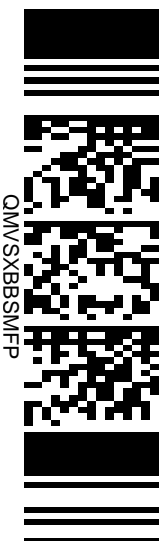
Regístrese, comuníquese y archívese.

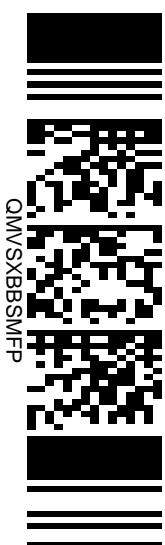
Redacción del ministro interino Matías de la Noi Merino.

N° Contencioso Administrativo-236-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada, además, por el ministro (I) Matías de la Noi Merino y el abogado integrante señor Rodrigo Antonio Montt Swett, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, tres de octubre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

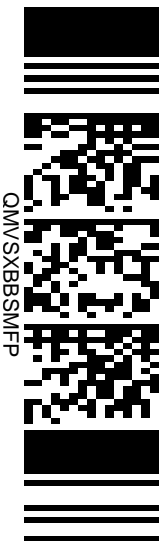




Q1MVSXBBSMFP

Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G. y Ministro Suplente Matias Felipe De La Noi M. Santiago, tres de octubre de dos mil veintidós.

En Santiago, a tres de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 11 de Septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.